

## » LUZ VERDE A LA EUTANASIA

El Parlament de Catalunya dio ayer luz verde a la tramitación de una propuesta, que después enviará al Congreso de los Diputados, para despenalizar la eutanasia.

## » ROBO Y VENTA DE UN ANILLO

Los Mossos han detenido a una limpiadora que robó un anillo valorado en cerca de 40.000 euros de la casa en la que trabajaba y lo revendió por 140 euros en una tienda de compraventa de oro.

# La Generalitat plantea a las eléctricas modificar la ley de pobreza energética

CAMILO S. BAQUERO, **Barcelona**  
Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona ni el mundo municipalista han logrado que las eléctricas se avengan a firmar los convenios contra la pobreza energética estableci-

dos en la ley 24/2015. Endesa y Gas Natural siempre han criticado la falta de seguridad jurídica de la norma y de ahí que el Departamento de Empresa se plantee modificar un artículo para intentar seducirlas. El nuevo re-

dictado, que está siendo negociado con todas las Administraciones, mantiene la obligación de las empresas de preguntar a los servicios sociales antes de hacer un corte pero modifica la figura del silencio administrativo.

El cambio también será consensuado con los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio origen a la ley, como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Las Administraciones y los activistas tienen hoy una reunión prevista. Una portavoz de Empresa explicó que se trabaja para lograr acuerdos con las eléctricas pero no confirmó el alcance de la modificación.

El Gobierno central recurrió el año pasado la parte de la ley que tenía que ver con la vivienda pero dejó intacta la relacionada con la pobreza energética. El articulado establece dos herramientas para luchar contra este problema que no han sido bien recibidas por las eléctricas.

Por un lado, está el principio de precaución, que obliga a las comercializadoras a preguntar a los servicios sociales si un cliente

es o no vulnerable antes de realizar un corte por impago. La ley dice que el Consistorio tiene 15 días para tramitar un informe de exclusión social. Si no, "se entiende que la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo", establece el artículo nueve.

La Generalitat, dicen fuentes de la negociación, plantea eliminar ese silencio administrativo y fijar un plazo más generoso para la tramitación. Esto, agregan las mismas fuentes, iría acompañado de más personal en los servicios sociales, lo cual ya está presupuestado en los contratos programa. Del total de solicitudes de informe en Cataluña, el 10% se rechazan, otro 10% se aprueban y al resto se le mantiene el suministro por el silencio administrativo.

Por otro lado, la ley 24/2015 pretende que las Administraciones y las compañías firmen con-

venios que sufraguen ayudas a fondo perdido para pagar al menos el 50% de la factura de los pobres energéticos y los programas para evitar el problema social. La ley no obliga a las eléctricas a suscribirlos, pues se trata de un acuerdo entre las partes.

## Principio de precaución

La muerte de una anciana en Reus, a la que Gas Natural le había cortado la luz sin preguntar al Ayuntamiento y que los servicios sociales no tenía identificada como pobre energética, puso el foco en el principio de precaución. Muchos consistorios no pueden asumir la carga burocrática de revisar los listados de cortes para confirmar los casos de vulnerabilidad y la tragedia demostró que las empresas no cumplían la ley, aduciendo que falta

un reglamento que lo desarrollara.

Los promotores de la ILP no ven claro el objetivo de la modificación. María Campuzano, portavoz de APE, ve un ataque al principio de precaución, que considere el modo apropiado para llegar a familias no usuarias de los servicios sociales.

Las empresas justifican que quieren evitar los casos de "picaresca" y poner fin a la incertidumbre de no tener respuesta de los Consistorios. Las fuentes de la negociación explican que si se cambia el artículo nueve, las eléctricas están dispuestas a firmar los convenios fijados por la ley. Desde Endesa y Gas Natural aceptaron las conversaciones pero no entraron en detalles. El cambio legislativo, de tirar adelante, se haría a través del trámite de lectura única en el Parlament.

## El asesinato de los Agentes Rurales les remató en el suelo

MARTA RODRÍGUEZ, **Girona**  
Ismael Rodríguez, el asesino confeso que mató a sangre fría a dos Agentes Rurales en Aspa (Segrià) el 21 de enero, les remató cuando ya estaban en el suelo, según las autopsias practicadas a los cuerpos de Xavier Ribes y David Iglesias. Los cuatro disparos a los dos agentes se realizaron a una distancia de entre 1,5 y seis metros.

Los forenses refutan la versión de Rodríguez, que dice que disparó desde unos 15 metros en un acto reflejo. El informe señala que una de las víctimas recibió un primer disparo a tres metros de distancia; el segundo, de arriba a abajo y 1,5 metros. Esa verticalidad hace concluir al forense que se hizo cuando el agente estaba abatido en el suelo. La segunda víctima sufrió un primer disparo a una distancia de entre tres y seis metros: impactó en una de sus muñecas y le atravesó la mandíbula al intentar protegerse.



Cientos de taxistas se manifiestan, ayer, en Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

## El taxi de Barcelona vuelve a la carga contra el "intrusismo"

JOSEP CATÀ, **Barcelona**  
Miles de taxistas llevaron ayer a cabo protestas en varias ciudades de España contra las empresas y los servicios de vehículos con conductor (los llamados

VTC), como Uber o Cabify. Los taxistas les acusan de competencia desleal, ya que las licencias de VTC se están extendiendo y tienen condiciones distintas y un coste más reducido. En ciudades

como Madrid, Barcelona y Valencia las protestas causaron problemas de tráfico, especialmente en el centro.

En la capital catalana la huelga de ayer fue la tercera en lo que

va de año en contra de lo que las asociaciones de taxistas consideran "intrusismo laboral". Según la principal organización convocante, Elite Taxi, el seguimiento de la huelga, que se extendió desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, fue "mayoritario". Sin embargo, a la marcha a pie desde la plaza de Cataluña hasta la Delegación del Gobierno en Barcelona asistieron menos manifestantes que en las últimas ocasiones.

Unos 500 taxistas, según los organizadores, protestaron por el paseo de Gràcia entre petardos y silbatos, y bajo una lluvia que acompañó a la comitiva toda la mañana. Una vez en la delegación, representantes de todos los colectivos se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablaneco, a quien expusieron sus reivindicaciones.

## 3.000 licencias VTC

Los convocantes prepararon piquetes para disuadir a los taxistas que querían trabajar en las principales paradas de taxi, como el Aeropuerto de El Prat o la Estación de Sants. No obstante, en la ciudad se podían ver taxis circulando, aunque con la luz verde apagada.

Los conductores piden que se mantengan las limitaciones a los VTC para que no se multipliquen y ahoguen al sector del taxi. Reclaman que se conserve la actual proporción, que como máximo es de una licencia de vehículo con chófer por cada 30 taxis. De momento, hay cerca de 3.000 licencias VTC paradas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la espera de ser concedidas a empresas y conductores.

La concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, mostró su apoyo al sector del taxi en huelga, y calificó a las aplicaciones de "falsas economías colaborativas".

VOL VIURE AMB  
#CATALUNYADIGNITAT

Manifestació a Manresa el novembre de l'any passat, després de la mort d'una dona a Reus atribuïda a la pobresa energètica ■ NOEMÍ BADRENAS / ARXIU

# El govern estudia modificar la llei de pobresa energètica

■ S'analitza posar un termini perquè els serveis socials hagin de respondre a les elèctriques sobre si una família és vulnerable ■ Es mantindrà l'obligació de les companyies de consultar abans de fer un tall

Sònia Pau  
BARCELONA

Es calcula que al voltant d'un 80% de les consultes que les empreses distribuïdores d'electricitat han fet als serveis socials per saber si una llar està en situació de vulnerabilitat abans de tallar-li el servei per impagament no tenen resposta. La llei 24/2015, contra la pobresa energètica, determina que si no hi ha resposta s'entén que és un cas de vulnerabilitat. Ara, quan s'ha prorrogat el termini perquè les distribuïdores firmin un conveni i assumeixin la meitat dels rebuts de les famílies sense recursos, el govern estudia eliminar aquest silenci administratiu positiu i donar un temps als serveis socials perquè hagin de resoldre si és un cas de pobresa o no.

Aquest silenci administratiu positiu és un dels punts de la llei que des del primer moment han aixecat més recels entre les distribuïdores de serveis bàsics, perquè consideren que s'hi poden colar casos d'impagament d'abonats que no siguin vulnerables. Segons fonts consultades per aquest diari, la reforma d'aquest punt –que és el 9.1 de la llei– podria desencallar l'objectiu, que és que les famílies realment vulnerables no pateixin pels subministraments perquè se'n fan càrrec al 50% l'administració i les elèctriques.

La reforma legal l'estan analitzant en un front comú els nou promotors del conveni únic contra la pobresa energètica que es va presentar el 19 de gener en un acte al Palau de la Generalitat presidit pel

## Les dates

23/07/15

s'aprova al Parlament la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en habitatge i pobresa energètica.

19/01/17

govern i ens locals presenten un conveni perquè les companyies paguin el 50% del deute de llars vulnerables.

31/03/17

les companyies no han firmat el conveni contra la pobresa energètica i es prorroguen les negociacions.

## Més de 200 denúncies per talls indeguts

Des de l'entrada en vigor de la llei 24/2015 l'Agència Catalana del Consum (ACC) ha rebut almenys 217 denúncies per talls indeguts, de les quals es van incoar 124 expedients. Són dades que va fer públiques l'ACC a mitjan febrer. En aquell moment, després de la investigació corresponent per comprovar si els talls de llum o gas s'havien adequat a la norma –bàsicament si s'havia

respectat el principi de precaució, és a dir, si s'havien consultat els serveis socials per saber si es tractava d'una llar en situació vulnerable–, es van incoar 124 expedients. El nombre d'expedients resolts amb sanció són 98.

La mort el novembre passat d'una dona a Reus en un incendi provocat per una espelma, perquè li havien tallat la llum, va marcar un abans i

un després. Entre les accions fetes, algunes acordades entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hi ha una campanya d'inspeccions per revisar els talls de llum i gas i comprovar si s'havia complert la llei. Les entitats consideren important que l'administració sigui proactiva amb les inspeccions, més enllà de les denúncies.

president, Carles Puigdemont, i l'alcalde de Barcelona, Ada Colau. També hi havia representants de les quatre diputacions, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

## Administracions a l'una

Aquell dia es va visualitzar una unitat d'administracions i es va donar de temps fins a finals de març a les companyies per firmar el conveni i acordar l'establiment d'ajuts a fons perdut i grans descomptes contra la pobresa energètica. Pocs dies abans que s'acabés el termini, tant Endesa com Gas Natural Fenosa –que representen gairebé el 70% de la distribució elèctrica a Catalunya– van manifestar-se públicament a favor de continuar negociant, però per ara no hi ha res firmat.

És en aquest punt que es torna a buscar una acció conjunta entre govern, Ajuntament de Barcelona, diputacions, AMB i entitats municipalistes per modificar la llei 24/2015. Segons fonts de la negociació, es tractaria només de canviar el punt 9.1 mantenint el principi de precaució. Això vol dir que la comercialitzadora ha de continuar consultant serveis socials per saber si una família és vulnerable abans de fer un tall. El canvi, però, seria que els professionals dels serveis socials haurien d'elaborar un informe i respondre si ho és o no en un termini fixat, que podria ser d'entre dos i tres mesos.

Pel que fa a la tramitació de la reforma de la normativa, que hauria de passar pel govern, la idea amb què es treballa és tramitar-la per la via de lectura única, de manera que es pogués resoldre en un parell de mesos.

## A partir d'una ILP

La llei 24/2015 va arribar al Parlament a partir d'una iniciativa legislativa popular (ILP) promoguda per l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i l'Observatori DESC. La portaveu de l'APE, Maria Campuzano, va explicar ahir que no estan a favor de cap reforma de la llei, tot i que estan disposats a escoltar. ■